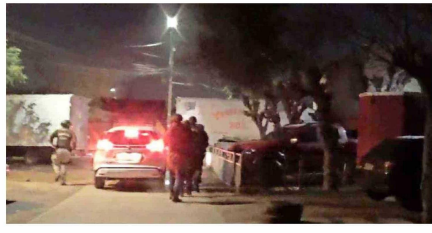
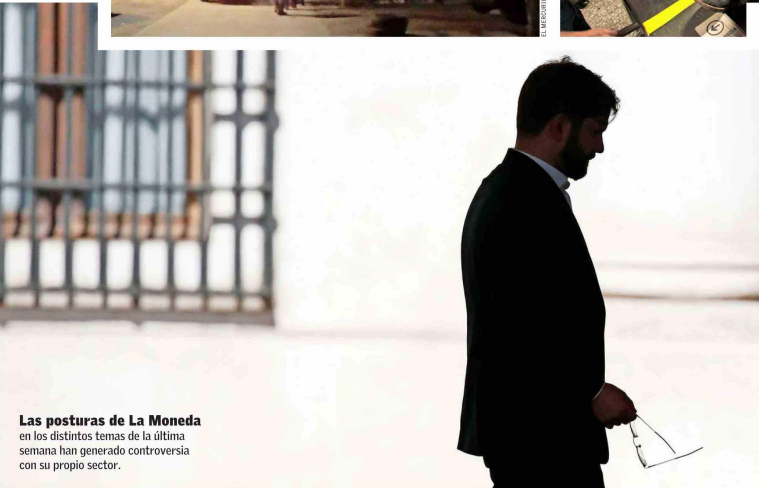


El sábado 6 de julio Carabineros realizó el allanamiento en Villa Francia. El procedimiento se hizo en diversos inmuebles, entre ellos, la Radio Villa Francia y el Comedor Comunitario Luisa Toledo.



El anuncio de alza del pasaje de esta semana hizo recordar las protestas de 2019.



Las posturas de La Moneda en los distintos temas de la última semana han generado controversia con su propio sector.

A TRES MESES DE LAS ELECCIONES

SEGURIDAD, ALZA DE PRECIOS Y VOTO OBLIGATORIO: Los flancos que se le abrieron al Gobierno

La incontrolable molestia del PC por el allanamiento en Villa Francia y por el proceso contra Daniel Jadue; desacuerdos por el alza de la luz y del transporte público; cuestionamientos de la izquierda por el voto obligatorio. Eran todos temas en los que el Ejecutivo buscaba dar señales de gobernabilidad pero que, en vez de eso, obtuvo desorden en sus propias filas. Y todo, *ad portas* del inicio de las campañas. | **M. BAKIT y C. AGURTO**

Seguridad: las dos almas enfrentadas

En el Gobierno, según dicen los expertos, tienen claro que el tema que más preocupa a la ciudadanía hoy es la seguridad. Y, al contrario de lo que pasó en el primer año de gestión, la idea es que también sea su materia más importante.

De ahí que el principal foco de la primera parte de la pasada Cuenta Pública presidencial fuera la seguridad. Y es por ello también que la ministra encargada del tema, Carolina Tohá, ha endurecido el tono. Tanto ella como el subsecretario Manuel Monsalve llevan semanas haciendo gestos a Carabineros, a la PDI e incluso a la oposición. De hecho, con esta última han reconocido coincidencias en las medidas a aplicar.

En el Gobierno golpeó fuerte la arremetida del PC luego del allanamiento en Villa Francia donde, el sábado 6 de julio, se encontró un "arsenal".

"La gente tiene derecho a decir esto es una provocación, esto es un montaje (...). Espero de parte de la ministra del Interior que exista la absoluta y plena transparencia", dijo el Presidente del PC, Lautaro Carmona. Una declaración que en el Gobierno evaluaron como demasiado dura y en un muy mal momento, pues pone en tela de juicio la unidad del oficialismo en el tema seguridad. Justo de cara a las elecciones.

Si bien el timonel comunista luego bajó el tono, el daño estaba hecho, según los expertos. "Si habla el presidente del PC cuestionando la institucionalidad, sembrando la duda respecto del funcionamiento de las reglas de la democracia, eso le hace muy fácil el trabajo a la oposición y sus candidatos cuando salgan a golpear puertas diciendo que el oficialismo no

prioriza la seguridad de las familias", dice el diputado PPD Jaime Araya.

Para el columnista y escritor Sergio Muñoz, el tema es grave: "No puede aceptarse un doble juego en el seno de la propia coalición gobernante. No puede haber ambivalencias respecto de la defensa del orden constitucional y legal. Antes que, por cualquier otra materia, el Presidente Boric será juzgado por lo que haga o deje de hacer en ese terreno".

En cambio, Nicolás Fleet director del Magister en Sociología de la UAIH desdramatiza lo sucedido. "Obedece más a lo que se llama una ética de la convicción, es decir, reaccionar de acuerdo a los valores que defiende el partido, más que a su responsabilidad dentro del Gobierno".

El "proyecto antipobres"

Esta semana, se rechazó en el Senado la opción de aplicar multas a quienes no acudan a votar en las elecciones municipales. Algo que La Moneda respondió con un veto para restablecer la sanción.

Dentro de los argumentos que se vertieron para rechazar esta idea, llamó la atención lo dicho por el diputado Gonzalo Winter (FA), quien no solo se opuso a la idea de su Gobierno, también calificó la iniciativa como un "proyecto antipobres", porque a su juicio "se busca castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta".

En el oficialismo y en el Ejecutivo tomaron distancia del líder frenteamplista. El diputado Diego Ibañez, que además es presidente provisorio del Frente Amplio, dijo: "Yo al menos defendiendo el voto obligatorio".

El diputado Eric Aedo (DC) aseveró que "se equivoca el oficialismo cuando dice que está a

favor de determinadas circunstancias y lo rechaza si estas circunstancias le son adversas".

Mientras, el experto electoral y exdiputado, Pepe Aulh, también manifestó una postura crítica: "Esta discusión me avergüenza por la obscenidad con que se transparentan los intereses electorales de corto plazo".

Pensiones en suspenso

"El país tiene que sacar una lección: el foco de la reforma (previsional) debe estar puesto en los pensionados y para eso es necesario modificar la industria", sostuvo la semana pasada, en una entrevista radial, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

En esta línea, la jefa de la cartera ha impulsado fuertemente una fórmula que implica la separación de la industria de pensiones —entre un administrador de cuentas y los gestores de inversiones— algo que en la práctica implica el fin de las AFP.

La idea no generó consenso en el comité de expertos para el tema, que entregó su propuesta esta semana. Según fuentes de la mesa, la mayoría de los especialistas no cree conveniente la aplicación de esa iniciativa tal como está hoy en el proyecto. Incluso, se habrían manifestado más favorables a seguir la "línea Marcel" (más conciliadora), que la "línea Jara".

No es todo. Pese a que en los días previos el Gobierno se había declarado optimista respecto de los acuerdos a los que estaba llegando el grupo, al punto de que había expectativas de que se lograra legislar "a fines de julio", la falta de acuerdos en la forma de financiamiento de un alza en las pensiones moderó las ilusiones. Lo que es un balde de agua fría, pues, un resultado positivo de esas negociaciones le daría un punto al Gobierno que podría ser clave de cara, no solo a las elecciones municipales, sino a las que vienen el próximo año.

"Aprobar la idea de legislar pensiones (y ojalá aprobarla) le daría un respiro a La Moneda para enfrentar las elecciones de octubre de mejor manera", asegura Marco Moreno, analista de la Universidad Católica, quien cree que la derecha no tiene margen para oponerse más tiempo a la reforma. Otros son más escépticos y ven poco probable que la oposición propicie un triunfo de cara a las municipales.

Jadue y la distancia de las autoridades comunistas

Con pechera amarilla, esposado y escoltado por gendarmes hizo ingreso a la sala de audiencias del juzgado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). El impacto de la imagen generó una serie de reacciones en el PC y su proceso judicial traspasó fronteras. Tanto que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X un video de apoyo. Llamó la atención el contenido de su defensa. No solo pidió su libertad, también dijo que está "preso por la jurisdicción de Pinochet".

En el Gobierno hubo modestia. La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó lo dicho por Petro como "imprudente", mientras en Cancillería dijeron que era "inaceptable" y enviaron una nota de protesta a Colombia. En el PC, dirigentes y parlamentarios han defendido la inocencia de Jadue y han desarrollado acciones para revertir su situación judicial. Algunos han sido críticos incluso de la labor de la justicia y la fiscalía.

Sin embargo, esto ha derivado en un alejamiento de las autoridades del Gobierno que militan en la misma colectividad. Por ejemplo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo

(PC), a propósito de las declaraciones de Petro defendió la separación de los poderes del Estado en Chile y que de existir cambios de parte del sistema político al Estado de Derecho "lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países".

Para el abogado y analista político Gonzalo Cordero, lo que está ocurriendo con el alcalde "es un golpe duro para el PC", y agrega que "la corrupción económica golpea el núcleo de su credibilidad". Respecto de la reacción que han tenido en la dirigencia y parlamentarios, Cordero agrega que en la lógica comunista, "tiene que ser proporcional a la magnitud de la amenaza y eso explica la reacción, justificándolo todo, descalificando el sistema de justicia, impulsando campañas internacionales que incluyen acciones tan desusadas como las declaraciones del Presidente de Colombia".

Ley de Pesca: Un trasfondo ideológico

Hace algunas semanas, los cálculos del Gobierno sobre la tramitación de la Ley de Pesca solo entregaban cuentas alegres. Por una parte se suprimiría la llamada "Ley Longueira", la que ha sido utilizada por distintos sectores —incluyendo el FA— para criticar a la centro-derecha y diferenciarse de la forma "en que se hacía política antes".

Asimismo, Chile Vamos estaba siendo duramente criticado luego de que Ciper revelara que los diputados Cristhian Moreira (UDI), Sergio Bobadilla (UDI) y Bernardo Berger (ind.-RN) presentaron 211 indicaciones idénticas a un informe técnico-jurídico de la gremial empresarial Sonapeca. Pero el ambiente cambió drásticamente la semana pasada tras la indicación presentada por el diputado y presidente de la comisión de Pesca, Jorge Brito (FA), que buscaba —a instancias de una ONG— prohibir "generales estrés y dolor innecesario" a los "recursos hidrobiológicos sensibles". Una idea que fue rechazada por su mismo bloque y que luego tuvo que modificar.

Para el diputado Félix González (PEV), lo ocurrido "fue muy oportuno para desviar la atención, para quienes quieren apartarse del tema de fondo, que es que la actual Ley de Pesca se legislo con corrupción y eso no debe repetirse". Aunque, de todas formas avala el punto que hizo Brito.

Como sea, este hecho se transformó en un escenario propicio para abrir disputas dentro del Frente Amplio, en el oficialismo y también cuestionamientos hacia el nuevo partido y su pensamiento.

"(Hay) una pregunta mucho más de fondo y que tiene que ver con cuál es el concepto de lo humano que el FA tiene y (...) qué o quiénes son sujetos de derecho. (...) No tiene que ver con una torpeza en un proceso legislativo, tiene que ver con una cosa muy de fondo que te está indicando una concepción de lo humano que es importante relevar", dice María José Naudon, decana de la Facultad de Gobierno de la UAI.

Precios que duelen

La noticia del descongelamiento de las tarifas eléctricas cayó pésimo en algunos sectores del oficialismo que, según cuentan fuentes en reserva, consideraron que es un tema que la ciudadanía resentiría, afectando las campañas de los candidatos a alcaldes y concejales.

Quizás el mayor reflejo de esto estuvo nuevamente en el Partido Comunista. Hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, dejó entever su molestia, al punto de pedirle información al ministro de Energía, Diego Pardow. Mientras, el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, pidió postergar el alza hasta enero.

Otra crítica de cómo lo ha manejado el Gobierno es la diputada Camila Musante (ind.-PPD). Para ella lo ha hecho "de mala manera, (...) improvisado, tardío, un poco trámposo, donde se ha intentado culpar al Congreso, y creo que las medidas que están encima no van a ser suficientes".

Pero no es la única alza que provocó ruido, pues el jueves el Panel de Expertos del Transporte Público, anunció un alza de \$20 para el mes de julio, luego el Presidente ordenó que el aumento fuese de \$10. De todas maneras hubo manifestaciones estudiantiles y viernes y martes recordaron las evasiones en el metro —apoyadas por varios de los que están en el Gobierno hoy— que luego desembocaron en el estallido.

Las reacciones del sector más duro de la izquierda fueron casi automáticas. "¿Qué pasó? ¿Renuncia? ¿Resignación? ¿Falsas promesas? ¿Realismo? Las bolsillos de las familias más humildes tendrá que soportar una vez más un alza", escribió en su cuenta de X, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Según entendidos en la materia, el Gobierno había estado toda la semana preocupado por los efectos del tema, de ahí el anuncio de la reducción. Sin embargo, algunos se preguntan, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el pasaje deba subir de nuevo? ■